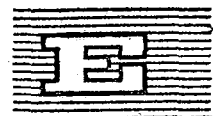


NAACIONES UNIDAS
CONSEJO
ECONOMICO
Y SOCIAL



Distr.
GENERAL

E/CN.4/979/Add.3
24 de enero de 1969

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
25° período de sesiones

Distribución doble

ESTUDIO DEL APARTHEID Y DE LA DISCRIMINACION RACIAL
EN EL AFRICA MERIDIONAL

Informe del Relator Especial

Adición

PARTE TRES

CAPITULO VIII

LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN GRAN JURADO DE
EXPERTOS EN MATERIA JURIDICA PARA NAMIBIA A FIN
DE PROTEGER LA VIDA, LA SEGURIDAD PERSONAL Y LOS
DERECHOS DE LOS HABITANTES DE ESE TERRITORIO

El Secretario General ha recibido el informe adjunto, preparado de conformidad con la resolución 3 E (XXIV) de la Comisión de Derechos Humanos, por el Sr. Manouchehr Ganji (Irán), Relator Especial de la Comisión, y tiene el honor de transmitirlo a ésta.

Las opiniones expresadas en este informe son las del autor.

PARTE TRES

LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN GRAN JURADO DE
EXPERTOS EN MATERIA JURIDICA PARA NAMIBIA A FIN
DE PROTEGER LA VIDA, LA SEGURIDAD PERSONAL Y LOS
DERECHOS DE LOS HABITANTES DE ESE TERRITORIO

CAPITULO VIII

LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN GRAN JURADO DE EXPERTOS EN MATERIA JURIDICA PARA NAMIBIA

SECCION A

INTRODUCCION

RASGOS GENERALES DE UNA PROPUESTA ENCAMINADA A ESTABLECER UN COMITE JUDICIAL PARA NAMIBIA

353. Al haber asumido las Naciones Unidas la responsabilidad directa del Territorio de Namibia, y al haberse establecido el Consejo para Namibia, se han creado relaciones jurídicas y morales de carácter excepcional entre las Naciones Unidas y los habitantes del Territorio. Estas relaciones jurídicas, que se derivan de la terminación del mandato de Sudáfrica en este Territorio, hacen que las Naciones Unidas puedan iniciar investigaciones o identificar a los autores de delitos punibles por el derecho internacional, perpetrados contra los habitantes del Territorio, sin infringir los derechos soberanos de ningún Estado ni intervenir en cuestiones que son esencialmente de la jurisdicción interna de un Estado.

354. La Comisión podría solicitar de la Asamblea General que, en cumplimiento de las obligaciones directas que las Naciones Unidas han contraído con respecto a los habitantes del Territorio de Namibia, estableciera un Comité Judicial para Namibia. El Comité, compuesto por juristas eminentes, adoptaría las medidas necesarias para descubrir, poner de manifiesto y reprimir los delitos cometidos contra los habitantes del Territorio y para imputar la responsabilidad a los autores de dichos delitos, protegiendo de este modo las vidas, la seguridad personal y los derechos de los habitantes del Territorio.

355. Teniendo en cuenta las funciones especiales que se atribuirían al órgano judicial cuya creación se estudia, sería preferible dar a dicho órgano un título descriptivo en vez del nombre de un organismo que exista ya en algún determinado sistema jurídico. El nombre de este órgano debe reflejar el hecho de que la Comisión de las Naciones Unidas para los Crímenes de Guerra y el Comité para la Instrucción de la Causa y el Proceso de los Principales Criminales de Guerra han desempeñado funciones similares. Por razones que se desprenden claramente de este estudio, se podría utilizar el tí-

descriptivo siguiente: "Comité Judicial para la Investigación de Crímenes Internacionales en Namibia". De aquí en adelante se llamará "Comité Judicial".

356. La autoridad del Comité Judicial sería aproximadamente la misma que la conferida a la Comisión de las Naciones Unidas para los Crímenes de Guerra, creada por las Potencias Aliadas en 1943, y al Comité para la Instrucción de la Causa y el Procesamiento de los Principales Criminales de Guerra, establecido de conformidad con la Carta del Tribunal Militar Internacional. La autoridad del Comité Judicial quedaría circunscrita, no obstante, a los crímenes internacionales perpetrados contra los habitantes del Territorio, cuya responsabilidad directa ha sido asumida por las Naciones Unidas.

357. El principio de que el derecho internacional impone deberes y obligaciones tanto a los individuos como a los Estados, está reconocido desde hace tiempo. En el presente caso, no es probable que se pueda detener en este momento, para responder a las acusaciones, a las personas y funcionarios del Gobierno de la República de Sudáfrica -que ocupan ilegalmente el Territorio de Namibia- que hayan infringido la ley. Aun cuando dichas personas quedaran en libertad y no pudieran ser procesadas, se habrían alcanzado, no obstante, muchos de los principales objetivos del Comité Judicial.

358. Las personas y funcionarios acusados de haber cometido crímenes punibles con arreglo al derecho internacional contra los habitantes del Territorio y que no se sometieran voluntariamente a la jurisdicción de las Naciones Unidas, quedarían marcados con el estigma de ser, en el plano internacional, "hombres perseguidos por la ley". Cualquier Estado podría detenerlos si entraran en territorio de su jurisdicción y ponerlos a disposición del órgano que, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, fuera competente para su enjuiciamiento. Si estas personas sospechosas se negaran a someterse a la jurisdicción de las Naciones Unidas, podrían quedar excluidas efectivamente de la comunidad de naciones. Como casi todos los Estados habrían reconocido la responsabilidad asumida por las Naciones Unidas respecto de este Territorio, sus viajes internacionales tropezarían con grandes dificultades. Se alcanzarían muchos de los objetivos del derecho penal al quedar estas personas virtualmente "fuera de la ley" por no haber querido someterse a la jurisdicción de las Naciones Unidas para la instrucción de la causa y el enjuiciamiento. Con los procedimientos judiciales entablados, esos delincuentes internacionales quedarían solemnemente advertidos de la determinación de las Naciones Unidas de reprimir sus crímenes y llevarlos ante los tribunales. En

otras palabras, el Comité Judicial desempeñaría funciones análogas a las de la Comisión de las Naciones Unidas para los Crímenes de Guerra y del Comité para la Instrucción de la Causa y el Procesamiento de los Principales Criminales de Guerra. Constituiría una preparación necesaria para el posible procesamiento de las personas que, con arreglo al derecho internacional, fueran responsables de los crímenes cometidos contra los habitantes de Namibia.

359. En el caso de que se pudiera someter a dichas personas a un juicio auspiciado por las Naciones Unidas, se podría establecer un Tribunal Internacional para Namibia. No sería entonces inútil activar los preparativos para crear dicho Tribunal. En este estudio se prevé que las Naciones Unidas podrían adoptar todas las medidas judiciales necesarias para abrir una investigación e identificar a las personas sobre quienes recae la sospecha de haber cometido crímenes punibles con arreglo al derecho internacional, en espera de su detención y posible enjuiciamiento por la parte interesada.

SECCION B

OBJETIVOS DEL COMITE JUDICIAL

360. En el derecho penal interno la acusación formal no es sino una de las etapas del procedimiento de derecho penal, encaminada a preparar el juicio, la declaración de culpabilidad y la condena de los reos de delito. La mera propuesta de crear un Comité Judicial para instruir la causa de aquellas personas acusadas de haber cometido delitos internacionales en el Territorio de Namibia bastaría para alcanzar algunos de los principales objetivos del Comité, aunque no exista ninguna probabilidad de detener y juzgar a los acusados en un futuro próximo.

361. Al instruirse la causa de las personas y funcionarios acusados de haber cometido crímenes punibles con arreglo al derecho internacional contra los habitantes del Territorio de Namibia, estas personas quedarían solemnemente advertidas de la determinación de las Naciones Unidas de reprimir sus crímenes y llevarlos ante los tribunales a pesar del tiempo que haya transcurrido hasta su detención y enjuiciamiento.

362. La información abierta contra la República de Sudáfrica por los crímenes internacionales perpetrados en Namibia, aislaría aún más a la administración ilegal de

Namibia y al propio Gobierno de Sudáfrica, y crearía de hecho una cuarentena que limitaría los movimientos de los funcionarios públicos sospechosos a la zona bajo jurisdicción u ocupación ilegal del propio Gobierno de Sudáfrica.

363. La publicidad que se daría a la instrucción y a la vista de las causas, en aquellos casos en que las personas inculpadas no se presentaran voluntariamente ante las autoridades encargadas de la indagación ni se sometieran voluntariamente a un juicio penal en el caso de que las pruebas así lo exigieran, constituiría de por sí un severo castigo. No se debe subestimar la reprobación y el descrédito que se desprenderían de la instrucción de la causa y de las audiencias públicas de testigos para la acusación. De esa manera se reduciría considerablemente la utilidad que para sus propios gobiernos tendrían las personas acusadas.

364. Además, la información abierta en tales circunstancias podría en realidad disuadir a los funcionarios del Gobierno de Sudáfrica de imponer penas de muerte y adoptar otras medidas irrevocables, en violación del derecho internacional, contra los habitantes del Territorio.

365. Las investigaciones realizadas por juristas eminentes sobre las presuntas violaciones del derecho penal internacional permitirían reunir y conservar pruebas pertinentes que de otra manera podrían perderse. La rápida reunión de pruebas documentales y de otro tipo sobre delitos internacionales y el pronto examen de los testigos allanarían las dificultades para su evaluación legal mucho después de haberse producido el hecho.

266. El examen de las pruebas de que se han cometido violaciones del derecho penal internacional que afectan a personas desconocidas facilitaría la atribución de la responsabilidad a las personas culpables que, de otra manera, hubieran rehuido la responsabilidad y hubieran seguido cometiendo impunemente crímenes contra los habitantes del Territorio sin temor de ser descubiertos ni denunciados. Además, la acusación formal de las personas sospechosas podría constituir, en cierto modo, una reparación moral para las víctimas de dichos crímenes internacionales. Esta acusación podría servir también para que éstos no se ampararan en el período de prescripción de los delitos y escapar así al castigo. Disiparía, por añadidura, la menor duda que abrigara la persona acusada sobre su obligación de someterse a juicio. La acusación formal serviría también para que los acusados prepararan su defensa en caso de que tuvieran

realmente que ser juzgados. A veces resulta difícil obtener pruebas y testimonios para la defensa cuando el acusado tiene que buscar dichas pruebas y testimonios al cabo de muchos años después de haberse cometido los actos sobre los que se basa la acusación.

367. La instrucción de la causa de personas sospechosas puede tener un efecto disuasivo mucho más eficaz que la acumulación de pruebas que condenen en términos generales la política y las medidas adoptadas por el Gobierno de la República de Sudáfrica durante su ocupación ilegal del Territorio. La instrucción de causas contra las personas que hayan cometido delitos punibles con arreglo al derecho internacional, puede resultar mucho más eficaz para evitar dichos delitos que una simple condena de la política y las actividades de todo un gobierno.

368. Además, la espectacularidad y el interés que despertarán las audiencias públicas en tales circunstancias podría interesar a la opinión pública mundial en los delitos cometidos contra los habitantes del Territorio. Gracias a estos procedimientos judiciales, se podrá conmover a la opinión pública mundial en mayor medida que hasta la fecha. La opinión pública es siempre más sensible a la relación de tragedias y crímenes personales que a la exposición de violaciones en masa de los derechos.

369. Hay que observar también que, al incoar procesos judiciales, se evitaría la pérdida de autoridad de las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad sobre la cuestión de Namibia. Se pondría, además, de relieve el hecho de que las Naciones Unidas están dispuestas a utilizar una amplia gama de medidas ejecutivas.

370. Las pruebas y testimonios reunidos en la instrucción de estas causas proporcionarían una valiosa información para otros órganos de las Naciones Unidas encargados de adoptar decisiones y recomendaciones relacionadas con la cuestión del Territorio y la política del Gobierno de la República de Sudáfrica.

SECCION C

EXAMEN DE LA CUESTION DE SI EL COMITE JUDICIAL DUPLICARIA LA LABOR DE OTROS ORGANOS ESTABLECIDOS POR LAS NACIONES UNIDAS

371. Toda propuesta de crear un nuevo Comité de las Naciones Unidas exige un minucioso examen. La actual proliferación de órganos plantea la cuestión de determinar si

las funciones y objetivos que se encomendarían al Comité Judicial no podrían ser desempeñados satisfactoriamente por cualquier otro órgano ya existente. En términos generales, se puede afirmar que ninguno de los demás órganos de las Naciones Unidas, tal como están constituidos, parece reunir las condiciones adecuadas para alcanzar los principales objetivos del Comité Judicial y desempeñar sus funciones.

372. Desde que las Naciones Unidas asumieron la responsabilidad directa de los habitantes del Territorio de Namibia, su protección se ha encomendado exclusivamente a órganos políticos. Las acusaciones pronunciadas contra la política y la actuación de las autoridades de Africa del Sur que ocupan ilegalmente este Territorio, han sido de carácter político, formuladas por diplomáticos al servicio de sus respectivos gobiernos.

373. El Comité Judicial daría los medios de hacer acusaciones bien fundadas de orden jurídico. Dichas acusaciones, además de cumplir su finalidad primordial, que es facilitar las diligencias judiciales indispensables, darían una base concreta y convincente a las medidas políticas que podrían adoptarse en el Consejo de Seguridad y en los demás órganos principales de las Naciones Unidas con respecto al Territorio de Namibia. Las acusaciones del Comité Judicial se expresarían en documentos organizados y ponderados, y se basarían en las conclusiones de las investigaciones judiciales en las que todas las partes habrían tenido la misma oportunidad de expresar sus puntos de vista y en las que todos sus derechos habrían estado protegidos por garantías procesales. Los hechos alegados serían concretos y fruto de una investigación. Los principios jurídicos invocados serían principios consagrados. Se presentarían opiniones escritas en apoyo de las conclusiones de hecho y de derecho.

374. El peso y la autoridad de la instrucción de las causas y las conclusiones cobrarían más relieve por la independencia e imparcialidad de los miembros del Comité Judicial y su competencia personal. Otros elementos positivos serían los procedimientos y garantías judiciales que regirían la labor del Comité.

375. El Comité Judicial, como los órganos judiciales supremos de los propios Estados Miembros, no tendría recursos financieros ni autoridad ejecutiva. Su autoridad se basaría en la competencia de su personal y en la calidad de su trabajo, garantizada por la triple salvaguardia de la independencia, la imparcialidad y las garantías procesales.

376. El Comité Judicial prepararía el camino para el enjuiciamiento y castigo de las personas que hubieran cometido crímenes punibles, con arreglo al derecho internacional,

contra los habitantes del Territorio. Dicho de otra manera, cumpliría objetivos similares a los de la Comisión de las Naciones Unidas para los Crímenes de Guerra y a los del Comité para la Instrucción de la Causa y el Procesamiento de los Principales Criminales de Guerra. Serviría de etapa preliminar indispensable para el posible enjuiciamiento de los responsables de crímenes internacionales contra los habitantes del Territorio de Namibia. Constituiría una advertencia solemne dirigida a esos delinquentes de que las Naciones Unidas están dispuestas a reprimir sus crímenes y a llevarlos a los tribunales, aunque tenga que transcurrir mucho tiempo hasta su detención.

377. Ningún otro órgano de las Naciones Unidas puede cumplir las funciones judiciales del Comité. La responsabilidad directa del Territorio, asumida por las Naciones Unidas, requiere el desempeño de funciones judiciales además de las funciones políticas encomendadas por la resolución 2248 (S-V) al Consejo para el Africa Sudoccidental, ahora Consejo para Namibia, en el propio Territorio.

SECCION D

AUTORIDAD DE LA ASAMBLEA GENERAL PARA CREAR UN COMITE JUDICIAL

378. El 18 de julio de 1966, la Corte Internacional de Justicia pronunció un fallo sobre el litigio que le habían sometido Etiopía y Liberia, países que alegaban que Sudáfrica, Potencia mandataria, había violado las obligaciones que le imponía su mandato con respecto al Africa Sudoccidental, y que se le debía ordenar que aboliera el apartheid en el Territorio y que encomendara su administración a las Naciones Unidas ^{216/}. En su fallo, la Corte estableció que no se podía considerar que Etiopía y Liberia hubieran conseguido probar ningún derecho jurídico en esta materia y que, por consiguiente, no podía decidir acerca del fondo del asunto.

^{216/} South West Africa, Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports, 1966, pág. 6.

379. En su vigésimo primer período de sesiones, la Asamblea General examinó directamente en sesión plenaria la cuestión del Africa Sudoccidental y, el 27 de octubre de 1966, aprobó la resolución 2145 (XXI), por la que decidía que el mandato de Sudáfrica sobre el Territorio había terminado.

380. En la resolución 2145 (XXI), la Asamblea General reafirmó que el Africa Sudoccidental era un Territorio con estatuto internacional y que conservaría dicho estatuto hasta que obtuviera la independencia. La Asamblea decidió que el mandato concedido al Reino Unido y ejercido por el Gobierno de la República de Sudáfrica había terminado, que Sudáfrica no tenía ningún otro derecho para administrar ese Territorio y que, a partir de entonces, el Africa Sudoccidental se convertía en una responsabilidad directa de las Naciones Unidas. Resolvía, además, que en esas circunstancias, las Naciones Unidas debían cumplir estas responsabilidades con respecto al Africa Sudoccidental.

381. De este modo, en virtud de la resolución 2145 (XXI), las Naciones Unidas heredaron, por así decirlo, el poder mandatario, asumiendo los derechos y deberes de Sudáfrica con respecto al Territorio. En este contexto, hay que recordar que, con arreglo al Artículo 81 de la Carta, las Naciones Unidas están proyectando, efectivamente, asumir la administración directa de los territorios. (Según el Artículo 81, dicha administración se habría ejercido con arreglo a un acuerdo sobre administración fiduciaria.)

382. Al asumir la responsabilidad de administrar el Territorio de Africa Sudoccidental, las Naciones Unidas sustituyeron a Sudáfrica también en lo que respecta al "encargo sagrado" que crea la obligación de promover en todo lo posible, dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales, establecidos por la Carta, el bienestar de los habitantes de esos territorios, "para asegurar el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso".

383. Las obligaciones que recayeron sobre las Naciones Unidas por la resolución 2145 (XXI) y el Artículo 73 de la Carta, fueron parcialmente asumidas por el Consejo para el Africa Sudoccidental, creado en virtud de la resolución 2248 (S-V). Con arreglo a esta resolución, la Asamblea General reconocía que las Naciones Unidas tenían el deber de cumplir sus obligaciones adoptando medidas prácticas encaminadas a traspasar el poder al pueblo del Africa Sudoccidental y le confió los poderes y funciones siguientes, que se harían efectivos en el Territorio:

- "a) administrar el Africa Sudoccidental hasta la independencia con la máxima participación posible del pueblo del Territorio;
- b) promulgar las leyes, decretos y reglamentos administrativos necesarios para administrar el Territorio hasta que se establezca una asamblea legislativa después de las elecciones que se realizarán a base del sufragio universal de los adultos;
- c) adoptar inmediatamente todas las medidas necesarias, en consulta con el pueblo del Territorio, para establecer una asamblea constituyente encargada de redactar una constitución a base de la cual se realizarán las elecciones para constituir una asamblea legislativa y un gobierno responsable;
- d) adoptar todas las medidas necesarias para mantener la ley y el orden en el Territorio;
- e) traspasar todos los poderes al pueblo del Territorio cuando se declare la independencia."

384. La Asamblea General resolvió también que el Consejo confiaría las tareas ejecutivas y administrativas que estimara necesarias a un Comisionado de las Naciones Unidas para el Africa Sudoccidental. Hay que destacar que en esta resolución no se preveía que este poder suplementario fuera efectivo solamente en el Territorio. En la resolución se pedía al Consejo que se trasladase al Africa Sudoccidental para encargarse de la administración del Territorio. El Consejo intentó trasladarse al Africa Sudoccidental y las autoridades sudafricanas que ocupan el Territorio le denegaron la admisión ^{217/}.

385. Por tanto, el Consejo adoptó las medidas prácticas para traspasar todos los poderes al pueblo del Africa Sudoccidental. Debido, sin embargo, a la negativa de Sudafrica a aceptar la resolución 2248 (S-V), las Naciones Unidas no pudieron cumplir plenamente su encargo sagrado de asegurar el justo tratamiento de la población del Territorio y su protección contra todo abuso. Las Naciones Unidas se enfrentan ahora con la obligación

de tener que adoptar nuevas medidas prácticas para proteger a los habitantes del Territorio. Así pues, el Comité Judicial podría ser establecido en cumplimiento del sagrado encargo y las responsabilidades recaerían en las Naciones Unidas, en virtud de la resolución 2145 (XXI) y las disposiciones del Artículo 73 de la Carta.

386. Se ha realizado ya un estudio de la autoridad de la Asamblea General sobre un tema análogo. En el informe de la Comisión sobre Jurisdicción Penal Internacional, de 1953, se examinaba su autoridad para establecer una Corte Penal Internacional ^{218/}. Se alegaba que la facultad de la Asamblea General de crear una corte penal internacional mediante resolución, se basaba en el Artículo 22 de la Carta, en virtud del cual la Asamblea podía crear los órganos auxiliares que estimara necesarios para el desempeño de sus funciones. Algunos alegaron, por tanto, que ninguna disposición de la Carta impedía que la Asamblea General creara una corte penal internacional como órgano auxiliar. En cambio otros afirmaron que el Artículo 13 constituía una base más adecuada, porque otorga a la Asamblea General la facultad de promover estudios y hacer recomendaciones concernientes al desarrollo del derecho internacional. Los tribunales creados anteriormente por la Asamblea General, que según algunos representantes constituían precedentes útiles para una corte internacional (el Tribunal Administrativo y los Tribunales de las Naciones Unidas para Libia y Eritrea) no eran, según otros, precedentes adecuados, ya que la creación de esos tribunales se fundó en las facultades de que dispone la Asamblea General, en virtud de la Carta, en cuanto al personal de la Secretaría, o en los poderes amplios y muy excepcionales que fueron conferidos a la Asamblea por el Tratado de Paz con Italia ^{219/}. Por supuesto, si la Asamblea General puede establecer mediante una resolución una corte penal internacional, con más razón deberá considerarse que tiene facultad para establecer un Comité Judicial para instruir causas sobre los delitos internacionales.

387. Las facultades de la Asamblea en este sentido no se basan exclusivamente en el Artículo 22 de la Carta, sino también en obligaciones asumidas respecto del Territorio

^{218/} A/AC.65/L.13.

^{219/} A/AC.65/L.13, párrs. 31 a 34.

en virtud de la resolución 2145 (XXI) y las disposiciones del Artículo 73 en donde se ponen de relieve las obligaciones que, junto con las demás responsabilidades del mandato, recaen en las Naciones Unidas propiamente dichas.

388. Por último, no deja de tener importancia que la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, celebrada en 1968 en Teherán, aprobara la resolución (III) en la que,

"Declara que la política de apartheid y otros flagelos similares son un crimen de lesa humanidad que debe castigarse de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales pertinentes relativos a estos crímenes." 220/

SECCION E

EL CONTEXTO JURIDICO EXCEPCIONAL DE LA CUESTION RELATIVA A LA CREACION DE UN COMITE JUDICIAL

389. La acusación formal, el enjuiciamiento y el castigo de los delincuentes, es uno de los atributos inherentes a la soberanía. Ni las Naciones Unidas ni ningún Estado pueden violar la soberanía de otro Estado ni intervenir en un asunto que sea esencialmente de su jurisdicción interna. Sin embargo, el Gobierno de la República de Sudáfrica no está en condiciones de invocar el párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta, en relación con los actos perpetrados con respecto al Territorio de Namibia sobre el que no tiene soberanía y ocupa ilegalmente, y con respecto a cuyos habitantes las Naciones Unidas han asumido directamente la responsabilidad.

390. En estos tres sentidos, la situación jurídica del Territorio de Namibia es excepcional; las medidas adoptadas por las Naciones Unidas para proteger la vida, la seguridad personal y los derechos de los habitantes del Territorio no sirven de precedente en situaciones en que un Estado tiene soberanía sobre un territorio, ocupa legalmente ese territorio y las Naciones Unidas no han asumido directamente la responsabilidad con respecto a la población del territorio. Por consiguiente, toda medida que

adopten las Naciones Unidas en relación con el Territorio de Namibia ha de ser sui generis y, jurídicamente, debe evaluarse exclusivamente en el contexto de la cuestión relativa al Territorio de Namibia y de la autoridad de las Naciones Unidas para obrar con miras a proteger las vidas, la seguridad personal y los derechos de los habitantes de ese Territorio.

391. La cuestión relativa a la creación de un Comité Judicial para el Territorio de Namibia, con miras a proteger la vida, la seguridad personal y los derechos de los habitantes del Territorio, no guarda, por consiguiente, ninguna relación con las propuestas encaminadas a crear una corte penal internacional ni con el enjuiciamiento ante algún órgano penal internacional de los crímenes contra la paz, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. La cuestión relativa al establecimiento de un Comité Judicial tiene un contexto exclusivamente territorial: se plantea en relación con un territorio respecto del cual ningún Estado, y menos aún el Gobierno de la República de Sudáfrica, tiene mejores títulos que las Naciones Unidas para instruir una causa, juzgar y castigar a los criminales que cometen atrocidades contra la población del Territorio.

392. La creación de un Comité Judicial no requiere el ejercicio de jurisdicción extraterritorial por ningún órgano establecido por las Naciones Unidas. Solamente prevé el ejercicio de la jurisdicción por la Organización Internacional que ha asumido directamente la responsabilidad con respecto a los habitantes del Territorio.

393. El Comité no prevería la promulgación de leyes especiales para el Territorio, sino solamente la aplicación de los instrumentos con objeto de codificar las normas vigentes del derecho penal internacional.

394. No tomaría ninguna disposición para juzgar a las personas contra las que el Comité Judicial instruyera una causa. La creación del Comité no entrañaría ningún proceso de esa clase por parte de las Naciones Unidas, salvo en el caso de que las personas sospechosas se sometieran voluntariamente a la autoridad de las Naciones Unidas o fueran detenidas por las autoridades de un Estado que incoaría un proceso conforme al derecho penal internacional. La negativa de las personas sospechosas a someterse a la jurisdicción legítima de un órgano judicial de las Naciones Unidas no las facultaría para oponerse a las diligencias previas al proceso que pudieran iniciarse en su ausencia. Las personas no pueden confiar en que su propia negativa a comparecer ante el Comité Judicial impida que éste desempeñe sus funciones.

SECCION F

PODERES DEL COMITE JUDICIAL

395. El procedimiento acusatorio es típico de los procedimientos penales de common law. Este procedimiento se llama así porque se inicia con la presentación de una acusación. Se trata de un procedimiento oral y público. Es asimismo un procedimiento contradictorio, en virtud del cual el acusado y el fiscal se encuentran en plano de igualdad, mientras que el magistrado o juez actúa como árbitro. Sin embargo, este procedimiento requiere la participación de ambas partes en el proceso de enjuiciamiento.

396. El procedimiento inquisitivo obtiene su nombre de la instrucción inicial. Ese procedimiento es típico de sistemas de derecho civil como el francés. Este tipo de procedimiento exige la orientación técnica de un juez que dirige personalmente el proceso, en lugar de permitir que lo hagan las partes, y cuya instrucción tiene por objeto revelar toda la verdad en relación con el caso. La instrucción preliminar (instruction préparatoire) de la causa tiene una significación desconocida en los procedimientos del tipo acusatorio: el juez instructor interroga a los acusados y a los testigos, hace comparecer a los testigos y efectúa un careo entre el acusado y el acusador, dirige las pesquisas y otras indagaciones y tiene las facultades necesarias para llevarlas a buen término. El juez instructor francés está, por consiguiente, autorizado a examinar acusaciones contra personas desconocidas, acusaciones que tienen por objeto desenmascarar a los culpables. Este tipo de procedimiento resulta más adecuado en aquellas situaciones en que el acusado no participa en la vista de la causa. Se trata del mismo procedimiento adoptado por la Comisión de las Naciones Unidas para los Crímenes de Guerra.

397. Aunque en los sistemas judiciales de common law no se permite los juicios en rebeldía, las diligencias previas al proceso no exigen la presencia del acusado. En los sistemas de derecho civil, los juicios en rebeldía son excepcionales, pero las diligencias previas al proceso pueden efectuarse ex parte.

398. El Comité Judicial podría tener poderes más o menos análogos a los otorgados a la Comisión de las Naciones Unidas para los Crímenes de Guerra, establecida en 1942 ^{221/},

^{221/} Véase United Nations War Crimes Commission, History of Development of the Law of War, Londres, 1948.

y a los otorgados al Comité para la Instrucción de la Causa y el Procesamiento de los Principales Criminales de Guerra, creado en virtud del Estatuto del Tribunal Militar Internacional 222/.

399. Las funciones de la Comisión de las Naciones Unidas para los Crímenes de Guerra eran las siguientes:

- "1. Investigar todos los casos remitidos a la Comisión por cualquier gobierno de las Naciones Unidas acerca de los crímenes perpetrados u ordenados por los nacionales de cualquiera de los países que se encuentren en guerra con las Naciones Unidas contra los nacionales de las Naciones Unidas.
2. Reunir, registrar y evaluar todas las pruebas disponibles, tanto verbales como escritas, de tales crímenes.
3. Señalar a su atención, en particular, en primer término a los casos que parecen ser crímenes organizados y perpetrados en cumplimiento de una política deliberada.
4. Informar periódicamente y lo antes posible a los gobiernos de las Naciones Unidas acerca de los casos respecto a los cuales la Comisión está convencida de que se ha perpetrado un crimen, indicando siempre que sea posible a la persona o las personas que, a su juicio, son responsables.
5. Investigar y examinar cualquier otro caso o tipo de crímenes de guerra que le remitan de común acuerdo los gobiernos de las Naciones Unidas, e informar al respecto.
6. Instituir grupos de personas encargadas de recoger pruebas, y reunirse, en grupos o en pleno, en los lugares que decida periódicamente la Comisión.
7. Cooptar a expertos y asesores técnicos con el fin de efectuar determinadas investigaciones, según lo estime necesario la Comisión.
8. Formular recomendaciones sobre el procedimiento que habría de aplicarse a los criminales de guerra después de la guerra."

222/ United Nations Treaty Series, Vol. 82, tomo 279.

400. En virtud del Estatuto del Tribunal Militar Internacional se estableció un Comité para la Instrucción de la Causa y el Procesamiento de los Principales Criminales de Guerra. Ese Comité fue establecido con diversos fines consignados en el artículo 14 del Estatuto:

"Cada signatario designará a un fiscal principal para examinar los cargos formulados contra los grandes criminales de guerra y procesar a dichos criminales.

Los fiscales principales se constituirán en un comité para los fines siguientes:

- a) acordar un plan de trabajo individual de cada uno de los fiscales principales y de sus colaboradores;
- b) determinar la designación definitiva de los principales criminales de guerra que han de ser juzgados por el Tribunal;
- c) aprobar el acta de acusación y los documentos que se presenten en tal sentido;
- d) presentar dicha acusación y los documentos correspondientes al Tribunal;
- e) redactar el proyecto de reglamento, previsto en el artículo 13 del Estatuto y recomendar su aprobación al Tribunal. El Tribunal estará facultado para aceptar, con enmiendas o sin ellas, o para rechazar, el reglamento así recomendado;
- f) el Comité tomará decisiones sobre todo lo anterior por mayoría de votos y designará un presidente, según convenga y de conformidad con el principio de rotación..."

401. Conforme a lo dispuesto en el artículo 15, a los fiscales principales se les asignaron asimismo las siguientes funciones:

- "a) Examinar, reunir y presentar todas las pruebas necesarias antes o durante el juicio;
- b) Preparar el acta de acusación para someterla a la aprobación del Comité, de conformidad con el párrafo c) del artículo 14;
- c) Interrogar durante la instrucción preliminar a todos los testigos que sea necesario y a los acusados;

- d) Actuar como fiscales durante los juicios;
- e) Designar a representantes para que desempeñen las funciones que puedan asignárseles;
- f) Ocuparse de otros asuntos que estimen necesarios con el fin de preparar y celebrar el juicio..."

402. Los poderes y las obligaciones del Comité Judicial podrían ser análogos a los otorgados a la Comisión de las Naciones Unidas para los Crímenes de Guerra y al Comité para la Instrucción de la Causa y el Procesamiento de los Principales Criminales de Guerra.

403. Quizá se considere oportuno conferir al Comité algunos de los poderes otorgados en virtud del artículo 33 del proyecto de Estatuto de la Corte Penal Internacional, al "órgano de instrucción" previsto en el citado Estatuto, en particular el poder de determinar "que las pruebas son suficientes para admitir la acusación". Se podría así pedir al Comité Judicial que determinase judicialmente si, conforme al derecho internacional, existen pruebas suficientes para justificar una acusación presentada contra personas, por la que se les imputa haber cometido delitos de derecho internacional. También se le podría pedir que, en apoyo de tales determinaciones, publicase una opinión u opiniones exponiendo todas las pruebas disponibles y las disposiciones aplicables de la ley.

404. Teniendo en cuenta las críticas hechas al Estatuto del Tribunal Militar Internacional, podría ser aconsejable estipular que no se permitiría a los miembros del Comité Judicial desempeñar las funciones de fiscales en cualquier juicio futuro de personas contra las que se haya instruido una causa.

405. Todos los poderes otorgados al Comité Judicial se limitarían a los casos en que se alegara que los delitos punibles con arreglo al derecho internacional habían sido perpetrados contra los habitantes del Territorio de Namibia. Sin embargo, quizá sea aconsejable estudiar la posibilidad de ampliar los poderes del Comité Judicial para que pueda ocuparse de los delitos de derecho internacional perpetrados contra otras personas en Africa meridional.

SECCION G

DERECHO QUE APLICARIA EL COMITE JUDICIAL

406. Como se desprende de nuestro estudio de la "ley" y la práctica en el Africa Sudoccidental, la legislación aplicada por el Gobierno de la República de Sudáfrica en el Territorio de Namibia, que en la actualidad ocupa ilegalmente, fomenta la política de apartheid, tanto de derecho como de hecho ^{223/}. Sería inconcebible que las Naciones Unidas acusaran a ciertas personas de violar la legislación penal promulgada por la República de Sudáfrica y aplicada ahora ilegalmente por ese Gobierno en el Territorio de Namibia.

407. Sin embargo, el derecho penal internacional puede aplicarse en relación con los delitos perpetrados contra los habitantes del Territorio sin violar las garantías procesales de los acusados, incluido el derecho de no ser acusados y procesados en virtud de leyes penales retroactivas.

408. Se ha reconocido, en relación con las propuestas encaminadas a crear una corte penal internacional, que la expresión "delitos de derecho internacional" es bastante imprecisa. Se trata de un problema que no se plantea en relación con los procedimientos que se sigan contra personas con arreglo a esta propuesta.

409. La Asamblea General, o el Consejo para Namibia, en nombre de la Asamblea, podrían precisar los instrumentos, resoluciones, códigos, proyectos de códigos y otras fuentes que contienen pruebas fehacientes de derecho penal internacional aceptadas como ley a los efectos de los procedimientos en el contexto restringido de la situación en Namibia. Tal directriz de la Asamblea General a un órgano de las Naciones Unidas no prejuzgaría en modo alguna la cuestión más amplia del sentido que deba darse a la expresión "delitos de derecho internacional" en otros contextos y por otros órganos de las Naciones Unidas.

410. En sus directrices, la Asamblea General podría basarse en las declaraciones, resoluciones y convenciones que ella misma ha adoptado, así como en los códigos y

^{223/} E/CN.4/949/Add.1 y 2.

proyectos de códigos adoptados por otros órganos de las Naciones Unidas. Si bien estos instrumentos no tienen necesariamente fuerza obligatoria para los Estados que se han negado a reconocer o aceptar su carácter autorizado, se puede no obstante dar instrucciones a los órganos de las Naciones Unidas para que los acepten como obligatorios y se atengan a ellos. No hay necesidad de examinar minuciosamente el efecto jurídico de las resoluciones de la Asamblea General y de otros órganos de las Naciones Unidas, en contraposición con el efecto que ejercen esas resoluciones sobre los Estados Miembros.

411. De este modo, la Asamblea General podría dar instrucciones expresas a la acusación para que se basara en:

- 1) los principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y por las Sentencias de dicho Tribunal, que fueron afirmados por unanimidad por la Asamblea General 224/;
- 2) los principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto y por las Sentencias del Tribunal de Nuremberg, formulados y aprobados por la Comisión de Derecho Internacional 225/;
- 3) el Proyecto de Código de Delitos contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, aprobado por la Comisión de Derecho Internacional 226/;
- 4) la definición de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad consignada en el artículo I del Proyecto de Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, aprobado por la Asamblea General en su vigésimo tercer período de sesiones, así como otras disposiciones de dicho instrumento 227/;
- 5) la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General 228/

224/ Resolución 95 (I) de la Asamblea General, de 11 de diciembre de 1946.

225/ A/1316, págs. 11 a 15.

226/ A/2693, págs. 11 a 12.

227/ Resolución 2391 (XXIII) de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1968.

228/ Resolución 260 (III) de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1948.

- 6) la Convención de La Haya de 1899 y 1907 ^{229/}, el Protocolo de Ginebra de 1925 ^{230/} y las Convenciones de la Cruz Roja de Ginebra de 1929 ^{231/} y de 1949 ^{232/}.

412. El Comité Judicial también podría encargarse, en general, de aplicar el derecho internacional conforme a lo dispuesto en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

413. La Asamblea General, o el Consejo para Namibia en nombre de la Asamblea, podrían, por consiguiente, elegir entre dos métodos o combinar ambos métodos para dar mayor precisión a la expresión "delitos de derecho internacional", a los efectos del procedimiento procesal propugnado por las Naciones Unidas para los delitos cometidos contra los habitantes del Territorio de Namibia. Podría dar instrucciones generales en el sentido de que la ley aplicable sería el derecho internacional con arreglo a lo dispuesto en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia; también podría dar instrucciones, en términos más expresos, acerca de qué declaraciones, resoluciones, códigos, proyectos de códigos y convenciones adoptadas por los pertinentes órganos de las Naciones Unidas han de aplicarse en el curso del procedimiento previsto. Es evidente que los dos métodos no se excluyen mutuamente, sino que podrían combinarse con provecho.

SECCION H

COMPOSICION DEL COMITE JUDICIAL

414. Hay que tratar especialmente de dar el mayor peso y la mayor autoridad posibles a las conclusiones del Comité. Esto puede lograrse estipulando que el Comité debe estar

^{229/} Los textos aparecen en el libro de James B. Scott, The Hague Peace Conferences of 1899 and 1907, vol. II: Documents (Baltimore, 1909).

^{230/} Texto publicado por Manley O. Hudson en International Legislation, vol. II, págs. 1378 y siguientes (Carnegie Endowment, Nueva York, 1931).

^{231/} Actes de la Conférence de Genève de 1929 (Ginebra, 1930).

^{232/} United Nations Treaty Series, vol. 75 (1950), Nos. 970 a 973.

formado por investigadores y jueces de la más alta reputación profesional y garantizando su completa independencia e imparcialidad.

415. Sólo de este modo pueden atajarse los abusos inherentes a las investigaciones efectuadas por órganos políticos. Hay que salvaguardar cuidadosamente el carácter judicial del Comité, no sólo en teoría sino también en la práctica. Todas las instituciones pueden ser objeto de corrupción y de abuso; ahora bien, las salvaguardias judiciales hacen más difícil esos abusos.

416. Se podría dar más peso a las conclusiones pidiendo a los miembros del Comité Judicial que consignaran por escrito una opinión en apoyo de sus conclusiones acerca de todas las pruebas disponibles y de los fundamentos de hecho y de derecho de la acusación. Una opinión bien argumentada de importantes jurisconsultos cuya competencia profesional sería análoga a la de los miembros de la Corte Internacional de Justicia, tendría peso en todos los países.

417. También se podría aumentar la autoridad del Comité Judicial si éste estuviera compuesto de un número suficientemente grande de juristas. En tal caso, el carácter colegiado del Comité daría mayor peso a sus actuaciones. Este carácter se vería sobre todo realzado si se consiguiera que en dicho organismo estuviesen representadas las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del mundo. Con tal fin, el Comité Jurídico podría estar compuesto, más o menos, de seis a nueve miembros, elegidos por ejemplo conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en el que se dispone que:

"En toda elección, los electores tendrán en cuenta no sólo que las personas que hayan de elegirse reúnan individualmente las condiciones requeridas, sino también que en el conjunto estén representadas las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del mundo."

418. Se pueden elaborar los procedimientos necesarios para garantizar la independencia, la imparcialidad y la competencia profesional de los miembros del Comité Jurídico.

419. Al igual que los magistrados de la Corte Internacional de Justicia, los miembros del Comité no sólo deben ser imparciales, sino que también han de ser independientes de toda supervisión por parte de sus países propios y de las Naciones Unidas. Como en

el caso de las elecciones a la Corte, esto no excluiría la elección de personas que en el momento de la elección ocuparan cargos en sus propios países.

420. En el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia se establece un doble criterio general que puede seguirse en las elecciones al Comité Judicial, a saber, los requisitos profesionales previstos en el artículo 2 y los requisitos políticos relativos a una distribución geográfica equitativa, previstos en el artículo 9. Del mismo modo que la Corte está llamada a ser un tribunal mundial que aplica el derecho internacional universal, el Comité Judicial podría aplicar el derecho penal internacional.

421. Las condiciones personales que deba reunir un miembro del Comité Judicial deberían ser análogas a las que se exigen de un magistrado de la Corte Internacional de Justicia. En el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia se establece a grandes rasgos las condiciones requeridas para los magistrados. El artículo 2 estipula que:

"La Corte será un cuerpo de magistrados independientes elegidos, sin tener en cuenta su nacionalidad, de entre personas que gocen de alta consideración moral y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países, o que sean jurisoconsultos de reconocida competencia en materia de derecho internacional."

422. Con respecto a la designación de candidatos, tal vez sea posible concebir un mecanismo más sencillo que el adoptado para la designación de candidatos de entre los cuales se elegirían los miembros del Comité Judicial.

423. Una vez electos, los miembros del Comité Judicial permanecerían en sus funciones hasta que expirara su mandato y no estarían sujetos a deposición o destitución, lo cual realzaría su independencia y la autoridad de sus opiniones.

SECCION I

DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE COMPAREZCAN ANTE EL COMITE JUDICIAL

424. Al aplicar el derecho internacional con arreglo a lo dispuesto en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el Comité Judicial también podría

dar instrucciones para que se aplicasen otros instrumentos, resoluciones, códigos y proyectos de códigos aprobados por los principales órganos de las Naciones Unidas y por la Comisión de Derecho Internacional, que contienen pruebas fehacientes de las normas aceptadas como normas de derecho. En esos instrumentos figuran muchas disposiciones relativas a los derechos de las personas en los procedimientos judiciales. No deben comprometerse de ningún modo los derechos civiles de las personas que comparecen ante el Comité Judicial. Hay que proceder con cautela para impedir las condenas extralegales sobre la base de pruebas de culpabilidad prima facie. No debe marcarse a una persona con el estigma de culpabilidad durante la instrucción de la causa sin darle la oportunidad de someterse a un juicio minucioso e imparcial.

425. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos contiene disposiciones relativas a los derechos de las personas que comparecen ante los tribunales ^{233/}. Hay que prestar particular atención a las disposiciones de los artículos 2, 6, 7, 8, 10 y 11.

426. El significado jurídico de la Declaración Universal de Derechos Humanos ha sido reafirmado por la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en Teherán en 1968. En la proclamación de Teherán, la Conferencia Internacional proclamó solemnemente que:

"La Declaración Universal de Derechos Humanos enuncia una concepción común a todos los pueblos de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana y la declara obligatoria para la comunidad internacional." ^{234/}

427. Las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos serían, pues, obligatorias para el Comité Judicial. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado sin reserva por la Asamblea General en su resolución 2002 (XXI), de 16 de diciembre de 1966, se definen con más precisión los derechos enunciados en la Declaración Universal. Por consiguiente, sus disposiciones serían igualmente obligatorias para el Comité Judicial.

^{233/} Resolución 217 A(III) de la Asamblea General, de 10 de diciembre de 1948.

^{234/} A/CONF.32/41.

428. Varios artículos del Pacto guardan especial relación con los derechos de los acusados durante los procedimientos penales. Se trata de los artículos 2, 3, 9, 14, 15 y 16.

429. Otra fuente autorizada de derecho internacional que rige los derechos de los acusados es el Estatuto de las Sentencias del Tribunal Militar Internacional y los principios contenidos en el Estatuto y las Sentencias de dicho Tribunal que fueron afirmados por la Asamblea General ^{235/}.

430. El artículo 16 del Estatuto del Tribunal dispone:

"Con el fin de asegurar un juicio imparcial de los acusados, se aplicará el siguiente procedimiento:

- a) La acusación debe comprender detalles completos que especifiquen circunstanciadamente los cargos dirigidos contra los acusados. Se proporcionará al acusado, con antelación razonable respecto del juicio, copia de la acusación y de todos los documentos anexos a ella, traducidos a un idioma que entienda el interesado.
- b) Durante todo el interrogatorio que se le haga en la instrucción o durante la vista, el acusado tendrá derecho a dar explicaciones relativas a los cargos formulados contra él.
- c) Los interrogatorios durante la instrucción y durante la vista se efectuarán en un idioma que el acusado entienda o serán traducidos al mismo.
- d) El acusado tendrá derecho a hacer su propia defensa ante el Tribunal o a disponer de la ayuda de un abogado.
- e) El acusado tendrá derecho a presentar en el juicio, por sí o por conducto de su abogado, pruebas en abono de su defensa, y a repreguntar a cualquier testigo presentado por la acusación."

431. Estas disposiciones también han sido formuladas en el principio V de los Principios de Derecho Internacional reconocidos en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y en las Sentencias del Tribunal recogidas por la Comisión de Derecho Internacional ^{236/}.

^{235/} Resolución 95 (I) de la Asamblea General, de 11 de diciembre de 1946.

^{236/} A/1316, págs. 11 a 15.

432. Por otra parte, debe prestarse atención al artículo 38 del proyecto de estatuto de la Corte Penal Internacional, en el que se dispone que:

- "1. Se presumirá que el acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad;
2. El acusado tendrá un juicio imparcial y, en particular el:
 - a) derecho a estar presente en todas las etapas de la vista;
 - b) derecho a hacer su propia defensa o a estar defendido por un abogado de su propia elección, y a que el abogado esté presente en todas las etapas de la vista;
 - c) derecho a que los gastos de su defensa se efectúen con cargo al fondo a que se refiere el artículo 23, en caso de que la Corte esté convencida de que el acusado no dispone de medios necesarios para contratar los servicios de un abogado;
 - d) derecho a que en la vista de la causa se incluyan las pruebas documentales traducidas a su propio idioma;
 - e) derecho a interrogar, por sí o por conducto de su abogado, a cualquier testigo, y a inspeccionar cualquier documento u otras pruebas presentadas durante la vista;
 - f) derecho a presentar todas las demás pruebas en abono de su defensa;
 - g) derecho a la asistencia de la Corte para obtener acceso a cualquier documento que en opinión de la Corte pueda guardar relación con las cuestiones que examina la Corte.
3. El acusado tendrá derecho a ser oído por la Corte pero no estará obligado a hacer declaraciones. Su negativa a hacer declaraciones no pesará en la decisión relativa a su culpabilidad. Si opta por hablar, podrá ser interrogado por la Corte o por el abogado."

433. El Comité Judicial podría, pues, orientarse por las normas y principios de derecho internacional enunciados y adoptados en el Estatuto y las Sentencias del Tribunal Militar Internacional, en el proyecto de Estatuto de la Corte Penal Internacional, así como en los principios y normas contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. También debe prestarse atención

al estudio sobre la igualdad en la administración de justicia, que ha sido preparado para la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, de la Comisión de Derechos Humanos ^{237/}.

SECCION J

OTRAS INVESTIGACIONES QUE PODRA EFECTUAR EL COMITE JUDICIAL

434. Además de sus funciones con respecto a delitos internacionales, se podría pedir al Comité Judicial que investigue e informe acerca de las violaciones de los derechos humanos de los habitantes del Territorio. En consecuencia, podría utilizarse el Comité Judicial en calidad de órgano de investigación para el Territorio de Namibia, en lo que se refiere a los derechos humanos de los habitantes del Territorio.

435. Al efectuar esas investigaciones, el Comité Judicial podría orientar su labor basándose en las disposiciones que figuran en los instrumentos relativos a los derechos humanos, aprobados por los órganos principales de las Naciones Unidas y por los organismos especializados.

^{237/} E/CN.4/947; E/CN.4/SUB.2/286.